

Xalapa, Ver., a 31 de octubre de 2017

**Dr. Francisco Javier Acuña Llamas**

Comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia,  
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y  
Presidente del Sistema Nacional de Transparencia

**Presente**

Por este medio me permito enviar observaciones y comentarios al Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Información 2017-2021:

En el apartado 6 “Responsable: Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales”; se establece en el “Eje temático: Derecho de acceso a la información” como línea de acción *“Impulsar la construcción de un indicador que permita medir la eficacia y eficiencia de la gestión de los Plenos en los Organismos Garantes (coordinador de la política nacional)”*

De lo anterior, pudiera parecer que se otorga una atribución de vigilancia y control respecto del funcionamiento de los órganos garantes del país; con la que no cuenta el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Ello es así, en razón a que de lo establecido en el artículo 6° apartado A, fracción VIII, párrafos quinto y sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece que:

*“... El organismo garante tiene competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo que forme parte de alguno de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos,*

*partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicatos que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal; con excepción de aquellos asuntos jurisdiccionales que correspondan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuyo caso resolverá un comité integrado por tres ministros. También conocerá de los recursos que interpongan los particulares respecto de las resoluciones de los organismos autónomos especializados de las entidades federativas que determinen la reserva, confidencialidad, inexistencia o negativa de la información, en los términos que establezca la ley.*

*El organismo garante federal, de oficio o a petición fundada del organismo garante equivalente de las entidades federativas, podrá conocer de los recursos de revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten.*

*...*

Por otro lado, el artículo 21, fracciones III y IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señala como atribuciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, las de:

*“... III. Conocer, sustanciar y resolver los recursos de inconformidad que interpongan los particulares, en contra de las resoluciones emitidas por los Organismos garantes de las Entidades Federativas que determinen la reserva, confidencialidad, inexistencia o negativa de la información en términos de lo dispuesto en la Ley General;*

*IV. Conocer, sustanciar y resolver de oficio o a petición de los Organismos garantes de las Entidades Federativas los recursos de revisión que, por su interés o trascendencia, así lo ameriten, en términos de lo dispuesto en la Ley General;*

*...*

Asimismo, el artículo 41 fracciones II y III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señala:

“ ...

*III. Conocer y resolver los recursos de inconformidad que interpongan los particulares, en contra de las resoluciones emitidas por los Organismos garantes de las Entidades Federativas que determinen la reserva, confidencialidad, inexistencia o negativa de la información en términos de lo dispuesto en el Capítulo II, del Título Octavo de la presente Ley;*

*IV. Conocer y resolver de oficio o a petición de los Organismos garantes de las Entidades Federativas los recursos de revisión que, por su interés o trascendencia, así lo ameriten, en términos de lo dispuesto en el Capítulo III del Título Octavo de la presente Ley;*

...”

De los preceptos normativos señalados, se advierte que la única posibilidad para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, pueda vigilar o controlar la actuación de algún órgano garante del país, la es precisamente en el ámbito de su competencia, cuando conozca y resuelva los recursos de inconformidad interpuestos por los particulares en contra las resoluciones emitidas por los organismos garantes de las entidades federativas; o cuándo conozca y resuelva de oficio o a petición de los propios órganos garantes, los recursos de revisión que por su interés o trascendencia así lo ameriten en términos de lo dispuesto en el capítulo III Título Octavo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Lo anterior, es congruente con la autonomía, independencia e imparcialidad que el artículo 37 de la Ley General de la materia, otorga a los órganos garantes; es decir, el legislador federal al establecer las atribuciones del

Instituto Nacional de Transparencia, fue cuidadoso en definir que sólo bajo dos posibles supuestos, el órgano garante nacional, pudiera tener injerencia en las determinaciones de los órganos garantes de las entidades federativas; toda vez que, si se hubieran otorgado atribuciones amplias de revisión o escrutinio en el actuar de los Plenos, se corre el riesgo de romper con el equilibrio de coexistencia entre los institutos garantes del derecho de acceso a la información y protección de datos personales en las entidades federativas, respecto del Instituto Nacional.

Ello es así, en razón a que el actuar de los órganos garantes de las entidades federativas, en todas las instancias, estaría condicionado al visto bueno del órgano nacional, lo que sin duda, conllevaría una dependencia formal y material de los primeros, para someter a consideración del INAI, todas y cada una de las decisiones, no solo aquellas de tipo jurisdiccional, sino incluso, las relacionadas a su funcionamiento administrativo, cayendo en el absurdo que la estructura organizacional deba ser sometida y aprobada por el Instituto Nacional.

De ahí que, el hecho de *“Impulsar la construcción de un indicador que permita medir la eficacia y eficiencia de la gestión de los Plenos en los Organismos Garantes (coordinador de la política nacional)”* se considera que no resulta viable, pues implica la generación de una atribución que no ha sido conferida por el constituyente permanente al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Por otra parte, en el mismo apartado 6 “Responsable: Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales”; se establece en el “Eje temático: Derecho de acceso a la información” como línea de acción *“Impulsar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información en las entidades federativas mediante el procedimiento de facultad de*

*atracción de recursos de revisión de los organismos garantes de las entidades federativas (coordinador de la política nacional).”*

Al respecto, se considera que con el hecho de establecer esa línea de acción, pareciera que la “*tutela efectiva del derecho de acceso a la información en las entidades federativas*” solo se materializará, sí el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, ejerce la facultad de atracción.

Es decir, con esa redacción se le resta valor y trascendencia a las atribuciones que ejercen los diversos órganos garantes del país en el ámbito de su competencia, al resolver recursos de revisión.

En efecto, la línea de acción en comentario, establece como mecanismo para conseguir una tutela efectiva en el ejercicio del derecho de acceso a la información en las entidades federativas, la implementación de la facultad de atracción de recursos de revisión de los organismos garantes.

En este sentido, de proceder en esa manera, por sí mismo haría ineficaz la existencia de los órganos garantes en las entidades federativas; no obstante que el artículo 37 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señala que los organismos garantes en el ámbito de su competencia son responsables de garantizar el ejercicio de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales, conforme a los principios y bases establecidos por el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Con base en lo anterior, tenemos que la “tutela efectiva” en el ejercicio del derecho de acceso a la información, no solo se logra por conducto del Instituto Nacional de Transparencia, sino que también se concretiza mediante la actuación de los órganos garantes del país.

Aunado a ello, el artículo 42 de la ley general de la materia, establece el cúmulo de atribuciones encaminadas a concretar esa “tutela efectiva”; entre las que se encuentran las de conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de las resoluciones de los sujetos obligados en el ámbito local; imponer medidas de apremio para asegurar el cumplimiento de sus determinaciones; promover y difundir el ejercicio del derecho de acceso a la información; garantizar condiciones de accesibilidad para que los grupos vulnerables puedan ejercer, en igualdad de circunstancias, su derecho de acceso a la información.

En razón de lo anterior, queda evidenciado que la tutela efectiva del ejercicio del derecho de acceso a la información, no se logra mediante el procedimiento de facultad de atracción de recursos de revisión de los organismos garantes de las entidades federativas;

Adicional a ello el propio Título Octavo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en sus capítulos II y III establece los términos y condiciones en los que específicamente podrá intervenir el Instituto Nacional, a efecto de que en su carácter de órgano revisor, pueda determinar si una resolución del algún órgano garante se encuentra o no ajustada a derecho, o en su caso, conocer de aquellos recursos de revisión que por su interés o trascendencia así lo ameriten y con la línea de acción planteada se abre un supuesto adicional al de la ley, lo cual no es permitido.

Es por ello que debe replantearse la inclusión de la línea de acción que nos ocupa, toda vez que es contraria a los preceptos legales que establecen la existencia y finalidades de los órganos garantes de las entidades federativas, y a las atribuciones expresas que se le conceden al INAI para intervenir en asuntos de las entidades federativas.

Derivado de lo señalado, se estima que se debe ser muy cuidadoso al determinar las líneas de acción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; toda vez que puede generarse un precedente de actuación que no se encuentra apegado a las atribuciones que constitucional y legalmente le han sido conferidas al órgano garante nacional.

De permitir esas líneas de acción se generarían condiciones de subordinación de los órganos garantes de las entidades federativas, con relación al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, lo que es contrario al espíritu del federalismo.

**Atentamente**



**Mtra. Yolli García Álvarez**  
**Comisionada presidenta**

C.c.p. Minutario.